



José Luis Reyna

El Estado narcotizado

El sistema político muestra síntomas inequívocos de descomposición. Ésta se ha acentuado en los últimos tiempos. El combate que la administración de Felipe Calderón le ha declarado al crimen organizado ha acelerado esa descomposición y, a la vez, ha expuesto la podredumbre que se ha instalado en las entrañas del aparato estatal. Los casos de Michoacán y Morelos no deberían sorprendernos, como no deberán hacerlo las acciones semejantes que se emprenderán, en un futuro cercano, en otras entidades federativas. La batalla que se libra tiene dos frentes: las calles y, más preocupante aún, dentro del propio Estado. Como lo dijo hace poco Roberto Madrazo: el Estado mexicano es otro cártel, sencillamente porque una parte de su estructura está infiltrada por la delincuencia.

El crimen organizado está experimentando una transición. De empresa ilegal con fines de lucro, para decirlo de algún modo, se está convirtiendo en actor político cuyo objetivo es el control del sistema. Ya no buscan tan sólo protección. Ahora quieren influir en los procesos políticos. La demostración más fehaciente al respecto es el caso michoacano, en donde al menos 10 representantes populares y una veintena de servidores públicos son presuntos cómplices del hampa. Puede lanzarse la hipótesis de que esos ediles construyeron un compromiso con los grupos delincuenciales desde antes de llegar al poder por la vía del financiamiento de las campañas, algo que ahora preocupa más que nunca ante

la proximidad de la elección del próximo 5 de julio.

Puede traerse a colación también la llamada Operación Limpieza, que tuvo lugar hace unos cuantos meses en la SIEDO: se actuó porque las instancias diseñadas para combatir la delincuencia no sólo no cumplen su función, sino porque se convierten en protectores de la misma. El fenómeno no es nuevo. Recuérdese el caso del general Gutiérrez Rebollo que, durante la administración de Ernesto Zedillo, combatía a una organización criminal para brindarle protección a otra.

Por supuesto que este problema de descomposición del sistema no es de reciente aparición. Las recientes declaraciones del ex presidente De la Madrid revelaron que los nexos entre un segmento de la clase política y la delincuencia ya tiene una historia larga. Es probable que en su sexenio se estableciera ese vínculo que adquirió lazos mucho más estrechos con su sucesor, Carlos Salinas, tal como lo mencionó el propio De la Madrid en la ya famosa entrevista con Aristegui.

Lo anterior toma más cuerpo cuando se encuentran datos de una investigación de la periodista Dolia Estévez en la que, con base en documentos hechos públicos (desclasificados) por el gobierno estadounidense, se puede concluir que desde los años 80 y en la década siguiente la presencia de los cárteles de las drogas ya tenía una importancia enorme en el escenario nacional. Por razones de seguridad del país vecino, no se les combatió, como ahora se pretende, con lo que se contribuyó a su crecimiento

El andamiaje de corrupción e impunidad del sistema político permitió que la delincuencia organizada gozara de protección y prebendas. Por eso la declaración tardía de una guerra contra un enemigo tan poderoso. Éste se incrustó en el corazón del propio Estado: lo narcotizó



Continúa en siguiente hoja

y consolidación (D. Estévez. "Documentos secretos confirman contubernio". *El Semanario* 28/V/09).

En uno de los documentos consultados por la periodista mencionada, un funcionario del Departamento de Estado del gobierno estadounidense afirma: "Muchos consideran que los programas para combatir el narcotráfico (en México) son insuficientes. Los traficantes y productores de las drogas están ganando terreno. Algunos temen que México se vuelva otra Colombia". Esto sucedía a fines de los 80 y principios de los 90. Pese a ello, México fue "certificado", como solía

hacer Washington con un conjunto de países. Sin embargo, en el caso mexicano la certificación tenía la función de mantener la estabilidad política y socavar el conflicto, pues descalificar a la administración de Salinas implicaría "reducirle su campo de maniobra para cooperar con los Estados Unidos". De acuerdo con la investigación de Estévez, podría concluirse que el problema que hoy presenciamos en toda su magnitud se gestó cuando menos hace 20 años, con la complacencia de los gobiernos estadounidenses de esa época (Reagan y Bush padre).

Estos datos lo único que hacen es confirmar que el sistema político mexicano tiende a la inoperancia y a la fragilidad. Que está rebasado. Que es retórico apelar a la unidad de los mexicanos, como insiste Calderón, para combatir esta lacra que se extiende por todo el tejido sociopolítico del país. Estamos ante

un problema estructural inédito por su magnitud sobre todo, por sus consecuencias. Que un segmento de la clase política se ha aliado con los diversos cárteles y, de ser así, reaviva la conclusión del Estado fallido.

El andamiaje de corrupción e impunidad del sistema político permitió que la delincuencia organizada gozara de protección y prebendas. En la actualidad eso ya no le es suficiente. Ahora quiere una tajada del poder político. Por eso la declaración tardía de una guerra contra un enemigo tan poderoso. Éste se incrustó en el corazón del propio Estado: lo narcotizó. ■■

jreyna@colmex.mx

